Presentación

El 24 de noviembre pasado entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en el ámbito federal en los Estados de Durango y Puebla. Tres juezas y dos jueces de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio han iniciado sus funciones y, con ellos, una nueva época de interpretación, integración y aplicación del Derecho penal en México. El panorama aparece como lleno de retos y pleno de responsabilidades para nuestros recién nombrados jueces y juezas, pero también para quienes desde el control constitucional y vía amparo definirán el contenido y práctica del nuevo proceso penal en nuestro país. La coexistencia del amparo (basado en el método de análisis del expediente) y el proceso penal (con la audiencia como metodología para la toma de decisiones) reclama una especial atención. En materia de capacitación, el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial ha comenzado un curso sobre *Dialéctica de los principios del sistema penal acusatorio y del juicio de amparo* en las sedes Durango, Mérida y Puebla (que el próximo año se impartirá en al menos 12 extensiones más).

La sección de *Estudios* de nuestra revista 38 estuvo dedicada, precisamente, a este tema. Por supuesto, tuvo como finalidad atraer la atención de los miembros de la carrera judicial federal sobre este tema. Uno que, como se verá en los próximos meses, habrá de madurar y ofrecer, sin lugar a dudas, materia para la discusión y el análisis. Por ahora, el defensor público Alejandro Hernández Urías propone un texto para detallar la figura de la víctima u ofendido en el amparo directo. El autor articula las reformas constitucionales en materia penal de 2008 la de derechos humanos de 2011 y la de amparo de 2013, a fin de plantear un terreno fértil para el estudio y la investigación con consecuencias fundamentales para la práctica jurídica. No cabe ninguna duda que el proceso penal acusatorio, con sus fundamentos garantistas y protección de los derechos humanos exigirá

constantemente la construcción de una práctica jurídica sólida en relación con cómo habrán de convivir nuestro juicio de garantías y el nuevo sistema penal.

En la sección de *Foro* hemos integrado II artículos. En su conformación podemos identificar las líneas de trabajo e interés de los miembros de la judicatura federal: al análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP); el estudio de la constitucionalidad y convencionalidad en el marco de la reforma de junio de 2011; los perfiles y exigencias que el modelo del juez de la Décima Época reclama en materia de motivación, así como el perfil del Derecho mexicano como un Derecho de los derechos. No tengo dudas, pues, de que la Revista del Instituto de la Judicatura Federal es un termómetro capaz de indicar la ruta de los intereses de quienes imparten justicia en México.

En relación con el primero de los temas que señalé, el recién nombrado Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, analiza la importancia, dogmática y práctica de una comprensión cabal del principio de oportunidad tal como ha sido regulado en el CNPP. Por su parte, la jueza Margarita Nahuatt Javier ofrece un estudio del uso que se plantea en dicho Código de los conceptos datos de prueba, medios de prueba y prueba. Sobre este tema, finalmente, el profesor chileno Decap Fernández presenta un excelente ejercicio sobre cómo pensar y planear, en concreto, el desahogo de una prueba pericial en el nuevo sistema penal. Estos trabajos, como refiere la jueza en el suyo, “nos permiten conocer el nuevo lenguaje procesal que se aplicará para hacer una realidad la reforma”.

La magistrada electoral Hernández Chong Cuy ofrece, un artículo que debe ser cuidadosamente revisado. No solo por lo provocador de su título (*Crónica de una muerte anunciada: la obligatoriedad de la jurisprudencia en entredicho*) ni lo interesante de su tema, sino porque, en última instancia es expresión de la atención que reclama la reforma al artículo primero constitucional respecto de una comprensión teórica coherente y abarcadora de las instituciones jurídicas fundamentales en

el sistema jurídico mexicano (como la jurisprudencia misma). Dicha reforma, desde mi perspectiva, avanza a nuestro país a un ejercicio más y mejor acabado de un constitucionalismo de los derechos en el que, como señala Prieto Sanchís, los derechos son concebidos “como normas supremas, efectiva y directamente vinculantes que pueden y deben ser observadas en toda operación de interpretación y aplicación del Derecho”. Y esta idea “invade”, “permea” a todo el sistema, incluido el mercantil, como bien explica el magistrado Domínguez en su artículo sobre intereses usurarios. Ahora bien, la capacidad de los derechos convertidos en principios para “disciplinar” un caso es algo que ha transformado radicalmente el papel de los jueces en México. ¿Hasta qué punto? Eso es algo aún discutible sobre lo que el magistrado Rosales Sánchez responde en su artículo “¿Los jueces nacionales son jueces interamericanos? Sobre esta misma línea avanza el texto del magistrado González Oropeza, aunque él imprime a su artículo la perspectiva siempre enriquecedora del Derecho comparado. En esta misma línea, Ulises Flores Sánches ofrece su estudio sobre el principio de igualdad y de no discriminación por orientación sexual a partir del caso *Karn Atala Riffo y niñas vs Chile*, resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El constitucionalismo de los derechos, desde una de sus muchas perspectivas, guía el quehacer jurisdiccional como una respuesta sustancial a la pregunta de cómo motivar una sentencia. El artículo del juez Rafael González Castillo responde a esa misma interrogante, pero desde un punto de vista formal (sobre la incorporación de preguntas como elemento fundacional del razonamiento jurisdiccional) su texto presenta importantes implicaciones teóricas sobre la ciencia jurídica y el lenguaje del Derecho que serán leídas, sin duda, con gran aprecio en este número.

En relación con los temas de análisis constitucional Francisco Castellanos Madrazo y Juan Luis Hernández Macías ofrecen sus textos sobre la sentencia interpretativa en el quehacer jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los alcances de la declaratoria general de inconstitucionalidad, respectivamente.

En la sección de Comentarios jurisprudenciales, por otro lado, presentamos dos comentarios de los secretarios Victor Hugo Hiram Magallanes y Miguel Ruán Díaz, mismos que esperamos despierten y promuevan el diálogo con los textos de las tesis jurisprudenciales discutidas que es, finalmente, el objetivo que persigue esta sección. La sección de *Reseñas*, finalmente, integra el texto de García Gonzáles sobre el libro dedicado a la justicia en línea y las tecnologías de la información.

Los textos de este número de nuestra Revista tienen pues mucho que decir y mucho que dialogar con sus lectores. Esperamos que cumplan su objetivo.

Julio César Vázquez-Mellado García
Magistrado Director del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela
Judicial